



Consejo Económico y Social

Distr.
GENERAL

E/CN.4/Sub.2/1994/NGO/37
23 de agosto de 1994

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones
y Protección a las Minorías
46° período de sesiones
Tema 4 del programa

EXAMEN DE LOS NUEVOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN LAS ESFERAS DE QUE SE HA OCUPADO LA SUBCOMISION

Exposición presentada por escrito por Defensores de los Derechos Humanos, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva (Categoría II)

El Secretario General ha recibido la siguiente comunicación, que se distribuye con arreglo a la resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico y Social.

[22 de agosto de 1994]

Informe preliminar sobre la lucha contra la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos económicos, sociales y culturales), preparado por el Sr. Guissé y el Sr. Joinet en cumplimiento de la resolución 1993/37 de la Subcomisión

1. La organización Defensores de los Derechos Humanos desea felicitar a la Subcomisión y a los Sres. Joinet y Guissé por haber emprendido un estudio de los mecanismos de la impunidad y de posibles medidas para luchar contra ese fenómeno. Tiene vivo interés en recibir el informe final de los Relatores, y espera que contenga recomendaciones concretas para eliminar el problema de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales. En particular confía en que en

el informe final quedará claramente establecido que los Estados tienen la obligación internacional de investigar ciertas violaciones graves de los derechos humanos, entablar la acción judicial y prever la reparación correspondientes, y que la legislación nacional no puede derogar esa obligación. En vista de la gravedad y la urgencia que sigue teniendo en el mundo entero el problema de la impunidad, es indispensable adoptar medidas contra ésta a fin de velar por el cumplimiento de los instrumentos y leyes que actualmente protegen la gama completa de los derechos humanos.

2. La impunidad de las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales es en efecto un tema amplio respecto del cual queda mucho por hacer. A juicio de los Defensores de los Derechos Humanos, el estudio que se ha emprendido debería concentrarse en los posibles mecanismos de lucha contra tal impunidad. Cabe considerar tres categorías de violaciones: las que cometen directamente los funcionarios del Estado, las que cometen particulares con la aprobación o aquiescencia del Estado y las que maquinan o facilitan instituciones económicas y financieras internacionales. Entre estas últimas es importante distinguir entre las violaciones que tienen su origen en fondos de proyectos y las que se deben a las políticas de ajuste estructural, condicionalidad y liberalización del comercio.

3. Los funcionarios del Estado y sus amigos pueden violar los derechos económicos, sociales y culturales por vía de la corrupción. Aparte un tratado multilateral de asistencia mutua, el estudio debería considerar medidas para asegurar una mayor transparencia en la asignación de los fondos de instituciones financieras internacionales y el establecimiento de un órgano investigador para determinar el uso que se da a los fondos internacionales.

4. Los derechos económicos, sociales y culturales también pueden ser violados por políticas estatales que tienen por resultado, aunque no sea por finalidad, privar a un grupo determinado de sus medios de subsistencia. Tanto los funcionarios del Estado como las instituciones multilaterales de asistencia y comercio pueden ser cómplices en esas políticas. La organización Defensores de los Derechos Humanos se refirió a algunas de estas violaciones en una intervención que hizo ante la Comisión de Derechos Humanos en relación con el derecho al desarrollo (E/CN.4/1994/NGO/50). Por ejemplo, proyectos de construcción de grandes presas y de cultivo de exportación comercial y otros proyectos análogos han privado a millares de familias rurales de sus medios de subsistencia. La concesión de permisos de explotación maderera a funcionarios estatales y a sus amigos y familiares ha privado a muchos de los pueblos de los bosques de Malasia, Indonesia, Rusia (Siberia) y otros países de sus medios de vida. Estos permisos de explotación maderera enriquecen a una pequeña minoría, pero aseguran los ingresos de exportación necesarios para el cumplimiento de los mandatos de las instituciones financieras internacionales.

5. Allí donde son claros los efectos reales o probables de dichas políticas y con todo se siguen aplicando esas políticas, cabría presumir una violación intencionada de los derechos humanos, y los funcionarios encargados de tales políticas deberían ser objeto de sanciones. Sin embargo, las sanciones no

deben ser por fuerza de carácter penal: cabe considerar como posibilidades la pérdida del puesto o la categoría, la jubilación o la concesión de reparación a las víctimas de las políticas. En determinados casos notables las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales serán simultáneas a violaciones del derecho a la vida. En semejantes casos también serán pertinentes las sanciones penales. En este sentido, las dos partes del estudio deben estar vinculadas.

6. Las políticas de "desarrollo" erróneas y nocivas son facilitadas, instigadas y a veces iniciadas por instituciones financieras internacionales. Además, instituciones multilaterales de comercio, como la nueva Organización Mundial del Comercio, aplican normas jurídicas que permiten a terceros desafiar y acabar con las políticas gubernamentales destinadas a restringir las exportaciones para proteger los medios de vida de las comunidades locales. Así, por ejemplo, las comunidades dependientes de una agricultura en pequeña escala se ven destruidas por la afluencia de productos baratos de importación en nombre del "libre comercio". Son miles los que quedan sin tierra, sin trabajo, sin medios de sustento y con una cultura empobrecida por mor de facilitar la expansión comercial de las grandes empresas de los países más ricos. Si en el estudio se ha de examinar la conveniencia de incorporar los criterios de derechos humanos en la labor del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, también habrá que considerar la necesidad de incorporar criterios análogos a las normas y a la labor de la Organización Mundial del Comercio.

7. La incorporación de los criterios relativos a los derechos humanos en la labor de las instituciones financieras y de comercio internacionales es un objetivo importante que debiera haberse establecido hace mucho. El estudio debería determinar en qué medida la doctrina de los derechos humanos orienta las actividades de estas instituciones en su calidad de organizaciones intergubernamentales compuestas de Estados. Como tales, estas instituciones tienen la obligación de abstenerse de realizar actividades que contribuyan a la violación de los derechos humanos. En el estudio también deberían examinarse los mecanismos que deberían tener a su disposición las personas cuyos derechos humanos fueran violados por las políticas o proyectos de esas instituciones a fin de obtener una reparación. Una posibilidad, entre otras, sería establecer un procedimiento de queja en virtud del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cabría considerar también la posibilidad de ampliar el actual grupo de inspección del Banco Mundial. Una premisa fundamental de todo procedimiento que se adopte ha de ser la de asegurar suficiente acceso a las organizaciones no gubernamentales.
